

deben presentar á la Contaduría general dentro de los plazos marcados al efecto.

4.º Redactar y entregar á la Contaduría general las cuentas de rentas públicas de su competencia, refundiendo las parciales de sus subalternos, despues de examinadas y solventados los reparos que hayan ofrecido.

5.º Llevar la contabilidad propia del ramo ó ramos de su Administración.

6.º Cumplir y hacer que se cumplan por todos los empleados sujetos á su autoridad las leyes, reglamentos, instrucciones y órdenes vigentes sobre los ramos de su respectiva administración, y las que en lo sucesivo se les comuniquen por sus superiores.

Art. 8.º Los Contadores generales de Hacienda pública son los interventores generales de la Administración del Estado, y por tanto les compete:

1.º Fiscalizar todos los actos de la Administración pública, en lo relativo á la declaración de derechos y recaudación y distribución del haber del Estado.

2.º Intervenir la ordenación y ejecución de los pagos é ingresos.

3.º Llevar la contabilidad general de su provincia respectiva; y

4.º Redactar las cuentas generales mensuales y anuales, y remitirlas al Ministerio de Ultramar.

Art. 9.º Los Contadores generales ejercerán la inspección é intervencion por medio de agentes directos establecidos cerca de todas las dependencias encargadas de los diferentes ramos de la Administración pública y de las Ordenaciones de Pagos.

Art. 10. Los Contadores generales quedan facultados para inspeccionar por sí ó por medio de delegados todas las dependencias y establecimientos de Guerra y Marina, en lo relativo á los servicios que produzcan liquidación y pago de obligaciones á favor y en contra del Estado.

Art. 11. Los Contadores serán responsables mancomunadamente con los Administradores, Ordenadores de Pagos y Jefes de establecimientos, de todos los actos ilegales de estos cometidos en la liquidación y reconocimiento de derechos y obligaciones de la Hacienda y del Tesoro, y á los pagos que realicen las Cajas, siempre que los consentan sin hacer observación por escrito acerca de su improcedencia ó ilegalidad y no hayan practicado todas las gestiones que están en sus facultades para evitarlos.

Art. 12. El Contador general estará subordinado al Intendente, por virtud de la autoridad superior que este ejerce, como Gefe de la Administración económica; pero en el desempeño de sus funciones dependerá de la Sección de Contabilidad del Ministerio de Ultramar, de la que recibirá instrucciones directamente, siempre que considere oportuno comunicárselas; y al mismo tiempo acudirá también, cuando crea necesario poner en su conocimiento faltas ó abusos observados en el cumplimiento de su acción fiscalizadora, que no hayan sido corregidos inmediatamente.

Art. 13. En las cuestiones que puedan suscitarse con las Autoridades superiores de la isla, deberá hacer oficialmente las observaciones que crea oportunas antes de autorizar el acto que considere improcedente; y si á pesar de haber manifestado todas las consideraciones y motivos que á su juicio se opongan á él, citando la disposición ó disposiciones en que se funde, recibiera nueva orden por escrito para efectuarle, lo ejecutará con debido acatamiento á sus superiores, y dará parte inmediatamente á la Sección de Contabilidad del Ministerio de Ultramar, salvando así la responsabilidad subsidiaria que debiera corresponderle y que asumirá por completo la Autoridad que haya dado la orden.

Art. 14. Los Contadores generales serán Jefes de los Interventores de las dependencias de los demás ramos de su respectiva provincia, incluso los de las oficinas de Guerra y Marina, en todo cuanto se refiera á la rendición de cuentas y á los libros de contabilidad.

Art. 15. Todos los Contadores subalternos é interventores de los diversos ramos de la Administración tendrán relativamente los mismos deberes, atribuciones y responsabilidades marcadas á los Contadores generales en los artículos 11 y 14.

Art. 16. Así los Contadores como los Interventores de todas las oficinas de Hacienda dependerán de la Sección de Contabilidad del Ministerio de Ultramar, de quien recibirán, en su caso, directamente las órdenes oportunas, y serán nombrados y removidos á propuesta fundada de la misma.

Art. 17. Ningun empleado de Contabilidad podrá ser destinado á otro servicio que aquel para que haya sido nombrado, sino con anuencia de la Sección de Contabilidad del Ministerio de Ultramar.

Art. 18. Los Tesoreros ó Jefes de Caja tienen á su cuidado la custodia de los caudales públicos, y les corresponde:

1.º Recaudar el importe de todas las rentas y ramos que producen ingreso en el Tesoro, y firmar las cartas de pagos ó resguardos que se entregan á los interesados.

2.º Hacer los pagos en virtud de las libranzas ó mandamientos que expida el Ordenador, intervenidos por el Contador.

3.º Cuidar de que los Jefes ó encargados de las cajas subalternas rindan con puntualidad sus respectivas cuentas, y de examinarlas, separarlas y

refundirlas en la general que debe presentar á la Contaduría general dentro de los plazos marcados al efecto.

4.º Rendir la cuenta general de Tesoro público, refundiendo las parciales de todas las Cajas subalternas despues de examinadas y solventados los reparos que hayan ofrecido.

5.º Llevar cuenta y razon exacta y bien ordenada de la entrada y salida de caudales.

Art. 19. Los empleados que por cualquier razon estén encargados á la vez de las funciones de Administradores, Depositarios é Interventores cumplirán las obligaciones que quedan asignadas á cada uno de los caracteres de que se hallen investidos.

Art. 20. Forman el activo del Estado el importe de todas las propiedades, rentas, contribuciones y derechos; y el pasivo todas sus obligaciones y todos los gastos de su servicio.

Art. 21. De uno y otro se formará anualmente un presupuesto detallado por secciones, capítulos y artículos, ó sea por ramos, servicios y conceptos, en el cual deberá siempre procurarse que el importe de los gastos no exceda de los ingresos calculados.

Art. 22. Son únicamente obligaciones exigibles del Estado en las provincias de Ultramar las comprendidas en el presupuesto aprobado, y las que se reconozcan por disposiciones especiales.

Art. 23. Los Intendentes formarán el presupuesto anual de todos los gastos de su provincia respectiva, y lo pasarán al Ministerio de Ultramar, acompañado del de ingresos, ó la propuesta de medios con que cubrir todas las obligaciones.

Art. 24. A este fin, y poniéndose de acuerdo con la Autoridad superior, é impetrando su apoyo en caso necesario, reclamarán de los Jefes de todos los ramos los presupuestos parciales respectivos á cada uno, con la anticipación necesaria para que puedan hallarse en la Península dentro del mes de Octubre de cada año, los correspondientes al ejercicio que haya de empezar el 1.º de Julio del siguiente.

Art. 25. Estos proyectos de presupuestos deberán ajustarse, en cuanto á su nomenclatura y redacción, á los aprobados para el ejercicio precedente; y cualquiera modificación que se proponga, suprimiendo, aumentando ó variando los servicios, deberá hacerse en estados ó relaciones separadas por capítulos y artículos, y acompañándose de la oportuna Memoria en que se especifiquen las razones que aconsejen la alteración.

Art. 26. El Ministro de Ultramar redactará, con presencia de estos presupuestos y las modificaciones que se propongan, el general de las provincias ultramarinas y lo presentará á las Cortes oportunamente, á fin de que sea discutido y aprobado, en la forma prescrita por el art. 31 de la ley provisional de Administración y Contabilidad mandada observar para los presupuestos de la Península por decreto de las Cortes de 25 de Junio próximo pasado.

Art. 27. Si por cualquier motivo las Cortes dejasen de autorizar algun año la ley de presupuestos de Ultramar, se considerará vigente la inmediata anterior.

Art. 28. Cuando ocurran gastos urgentes de imprescindible necesidad que no tengn créditos asignados en el presupuesto, ó que teniendo no alcance á cubrirlos por completo, podrá el Intendente solicitar del Ministro de Ultramar, con las formalidades oportunas la concesión de un crédito extraordinario si la atención fuese nueva, ó la de un crédito supletorio si se trata de una obligación comprendida en el presupuesto, exponiendo las causas que lo motivan en uno ú otro caso, para en su vista resolver lo más conveniente, con arreglo á la legislación vigente.

Art. 29. Si la ampliación de crédito ó el crédito extraordinario fuesen de carácter urgente, y tan apremiante que no permita esperar la aprobación de la Superioridad, ó que por estar próxima la terminación del ejercicio no hubiera tiempo bastante para solicitarla, podrá concederlos el Intendente, de acuerdo y conformidad con el Contador general, y previo informe de la Junta de Jefes, bajo la responsabilidad de todos los que autoricen, y dando inmediatamente cuenta al Ministerio de Ultramar, con remisión del correspondiente expediente, para la resolución que proceda con arreglo á las leyes.

Con las mismas formalidades, y siempre bajo la responsabilidad establecida, podrán los Intendentes acordar la trasferencia de los sobrantes de un artículo á otro, dentro siempre del mismo capítulo, haciendo antes la liquidación definitiva de este.

Art. 30. La Junta de Jefes á que se refiere el artículo precedente la constituirán: el Contador general, los Administradores principales de todos los ramos, los Interventores de las Ordenaciones de Pagos de la capital y el Tesorero; y será presidida por el Intendente, haciendo de Secretario el Interventor de la Ordenación general de Pagos.

Art. 31. No se ordenará pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto ó en los créditos supletorios ó extraordinarios que se hubieren concedido por disposiciones posteriores, con arreglo á lo prevenido en los artículos que anteceden.

Art. 32. Los presupuestos regirán durante el año á que correspondan, terminado el cual, deberán anularse los créditos de que no se hubiese hecho uso, á no ser que haya sido autorizada convenientemente su permanencia; pero quedarán

abiertos en los seis meses siguientes, para terminar la liquidación y ejecución de los cobros y pagos no realizados al finalizar el mismo.

Art. 33. Los haberes que queden sin cobrar y las obligaciones no pagadas al cerrarse en dicha época definitivamente el presupuesto se comprenderán como resultas en el del ejercicio siguiente, por capítulos especiales y con la debida distinción de servicios.

Art. 34. En cada mes acordarán los Intendentes una distribución de fondos por capítulos del presupuesto de gastos, abriendo en las Tesorerías de Hacienda pública los créditos necesarios para satisfacer las obligaciones del mes siguiente, y con sujeción á ella se ordenarán los pagos de todas las atenciones del Estado.

Art. 35. Las distribuciones mensuales de fondos se redactarán con presencia de los pedidos ó presupuestos mensuales que deberán hacer los Jefes de todas las dependencias en que tengan lugar los gastos.

Art. 36. Al mismo tiempo, y de igual modo, se formará el cálculo de los ingresos probables que deban tener lugar en cada punto por todos los ramos y conceptos del presupuesto de ingresos; y este cálculo servirá de base para situar convenientemente los fondos necesarios en las respectivas Tesorerías.

Art. 37. No podrá ordenarse pago alguno que no haya sido comprendido en las distribuciones mensuales de fondos aprobadas; y por consiguiente, los Tesoreros se negarán á satisfacer y los Interventores á intervenir todo libramiento que exceda de la suma consignada en las distribuciones mensuales, siendo responsables de los pagos que se ejecuten sin este requisito.

Art. 38. Sin embargo de la regla general establecida en el artículo anterior, cuando ocurra algun gasto de reconocida urgencia y de tal trascendencia que de retardar su pago pueda seguirse grave perjuicio á los intereses particulares ó del Estado, la Autoridad política ó militar del punto en que esto suceda podrá mandar librar contra la respectiva Tesorería, dando orden por escrito al Tesorero y al Interventor, ó á los funcionarios que estén encargados de este servicio, para que tenga lugar el pago bajo la responsabilidad de dicha Autoridad; quedando unos y otros obligados á dar inmediatamente cuenta al Intendente, para que, previa la de la Autoridad superior respectiva, la preste su aprobación y disponga se comprenda la cantidad necesaria en la inmediata distribución.

Art. 39. Todo pago se hará en virtud de libramiento expedido por el Ordenador respectivo, y á él deberán acompañar los documentos originales de su justificación.

Art. 40. Sin embargo, podrán librarse en suspenso aquellas atenciones que por su índole no permiten la previa justificación; pero estos libramientos ó entregas á justificar son anticipaciones que hace el Tesoro á calidad de reintegro, y deberán formalizarse con el oportuno libramiento justificado, á la mayor brevedad posible, y siempre dentro del ejercicio en que haya tenido lugar el pago en suspenso.

Art. 41. Serán responsables al reintegro de todo exceso de pago que hubiere hecho el Tesoro público, los Jefes administrativos y funcionarios de cualquiera clase que lo hubieren ocasionado al liquidar créditos ó haberes, ó al expedir documentos, en virtud de las funciones que les están encomendadas, sin perjuicio de las penas á que hubiere lugar si resultase culpabilidad.

Art. 42. De todas las contribuciones, rentas, fincas, valores y derechos cuyos rendimientos constituyen el haber de la Hacienda, de la distribución é inversion que de este se haga, y de las operaciones que realice el Tesoro, se rendirán cuentas al Tribunal respectivo, en los plazos y en la forma que determinen las instrucciones y reglamentos.

Art. 43. Estas cuentas serán de cuatro clases, á saber: De rentas públicas. De gastos públicos. De Tesoro público. De presupuestos.

Art. 44. Los empleados de todos los ramos que manejen fondos del Estado, rendirán cuenta mensual justificada al Tribunal de Cuentas respectivo, por conducto de la oficina central de que dependan, dentro de los cinco primeros dias del mes siguiente al que corresponda la cuenta.

Art. 45. Dicha oficina central, reuniendo las cuentas de sus subordinados, y despues de haberlas examinado y comprobado con los datos que en la misma existan, las refundirá en una general del ramo que tenga á su cuidado, y las pasará originales á la Contaduría general de su provincia, con las observaciones que crea procedentes, en los 15 primeros dias del mes inmediato al de las cuentas.

Art. 46. La Contaduría general examinará y reparará las mencionadas cuentas; verificará los asientos correspondientes en los libros de contabilidad, y redactará, reuniéndolas todas, la cuenta general que debe remitir á la Sección de Contabilidad del Ministerio de Ultramar, acompañada de las originales parciales en que se funda y de los documentos que las justifican, en los 45 dias siguientes al mes á que corresponda la cuenta.

Art. 47. A todas las cuentas habrán de acompañarse copias autorizadas que se remitirán con los originales á la Sección de Contabilidad de dicho Ministerio, donde quedarán archivadas.

Art. 48. Todos los funcionarios obligados á rendir cuentas deberán verificarlo puntualmente dentro de los plazos marcados al efecto, bajo la pena de un día de haber por cada día que retarden el cumplimiento de tan preferente servicio, cuya suma deberá hacer efectiva el Gefe de la dependencia donde sean presentadas las cuentas con retraso; en la inteligencia que de no hacerlo así, caerá sobre dicho Gefe la responsabilidad de la demora que por esta causa puedan sufrir las cuentas que él deba rendir.

Art. 49. La Sección de Contabilidad del Ministerio de Ultramar está especialmente encargada de dirigir y centralizar la contabilidad de las provincias ultramarinas, con arreglo á las prescripciones de este decreto; y á la misma compete cuidar de su más puntual observancia, y hacer las aclaraciones que para su planteamiento puedan ser necesarias.

Art. 50. Dicha Sección establecerá la contabilidad por el sistema de partida doble; y por el mismo método habrán de llevarse los libros en todas las oficinas de cuenta y razon de las islas.

Art. 51. Todas las disposiciones del presente decreto empezarán á regir desde 1.º de Julio del año actual; y á ella deberán arreglarse desde dicha fecha todos los actos de la Administración económica, en cuanto sea posible, respecto de los que han tenido lugar en los meses transcurridos, y puntualmente los que se ejecuten en adelante.

Art. 52. Por el Ministerio de Ultramar se circulará una instrucción con todas las reglas y prescripciones necesarias, y los formularios de libros y documentos, para que tenga fácil y cumplido efecto cuanto se dispone en el presente decreto.

Dado en Madrid á doce de Setiembre de mil ochocientos setenta.—Francisco Serrano.—El Ministro de Ultramar, S. Gismundo Moret y Prendergast.

PROVIDENCIAS JUDICIALES

En los autos de juicio verbal seguidos á instancia de Don Guillermo Llaneras contra Don Pedro Albons, ha recaído la sentencia siguiente:—Puerto-Rico doce de Noviembre de mil ochocientos setenta.—Visto este juicio verbal seguido á instancia de Don Guillermo Llaneras, contra Don Pedro Albons, en cobro de ciento diez y ocho pesos noventa centavos procedentes del vale de fojas tres y de efectos tomados en el Establecimiento de la Casa comercial del demandante.—Resultando que el demandado fué citado en forma por medio de cédula dejada á su dependiente Don Agustín Español y que por negarse á firmar lo hicieron dos testigos segun consta de la diligencia extendida á fojas una vuelta.—Resultando que apesar de dicha citación no compareció al acto del juicio sin que se alegase justa causa de su ausencia, y que solicitado por el actor se declarase en rebeldía, así se hizo, continuando el pleito con el carácter consiguiente á esa declaratoria.—Resultando que el demandante produjo como prueba la confrontación de la cuenta presentada con sus libros comerciales y que, segun aparece de la certificación del Secretario, aquellos reúnen los requisitos prevenidos en el Código mercantil y aparece conforme en todas sus partes con los asientos de los libros.—Resultando que también solicitó como prueba que el demandado absolviera posiciones al tenor del interrogatorio que formuló, y que apesar de habersele citado por cédula dos veces no compareció por lo que á instancia del actor se le declaró confeso en virtud de lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil.—Considerando que los libros comerciales llevados en forma y con los requisitos legales constituyen prueba.—Considerando que adornando estas circunstancias los del demandante, sus asientos conformes con la cuenta presentada objeto de esta demanda convencen la certeza de la deuda.—Considerando que la confesión ficta produce los mismos efectos legales que la verdadera y que la rebeldía del demandado supone la carencia absoluta de excepciones que oponer. El Sr. Juez de Paz, por ante mí el Secretario dijo: Que debía declarar y declaraba con lugar la demanda y en su consecuencia condenaba á Don Pedro Albons al pago de los ciento diez y ocho pesos noventa y dos centavos que le reclama Don Guillermo Llaneras con las costas de este juicio. Notificándose este fallo personalmente al demandado si fuere habido ó en otro caso publíquese en la Gaceta oficial. Lo mandó y firma el Sr. Juez de Paz de la Catedral ante mí certifico.—José García Maitin.—Mariano G. Izquierdo.

Y para su publicación en la Gaceta libro la presente en Puerto-Rico á doce de Noviembre de mil ochocientos setenta.—V. B. García Maitin.—Mariano G. Izquierdo. 1